

C.A. de Copiapó

Copiapó, tres de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que en estos autos Rol N° C-646-2016, caratulados “Barón con Torrealba”, del Primer Juzgado de Letras de Vallenar, se dictó sentencia definitiva el día dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno, en la que la Jueza Titular, doña María Catalina López Werner, rechazó en todas sus partes la demanda de nulidad de contrato e indemnización de perjuicios interpuesta por don Rodrigo Arzola Helo, en representación de don José Alfredo Barón Solís y doña Margarita Paz Barón Solís, en contra de don Carlos Alfredo Candía Barón, en representación de SOCOBAR SpA., de doña Verónica Torrealba Costabál y don Iván Torrealba Acevedo, condenándose en costas a la parte demandante por haber resultado totalmente vencida.

En contra de la referida sentencia definitiva, los actores interpusieron, conjuntamente, recurso de casación en la forma fundado en la causal del artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, y recurso de apelación.

Concedidos que fueran los referidos recursos y elevados ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, se ordenó traer los autos en relación, llevándose a cabo la vista de la causa el día 8 de febrero último, compareciendo a estrados en representación de los recurrentes, el señor abogado, don Rodrigo Antonio Arzola Helo; mientras que por los recurridos, comparecieron los señores abogados, don Omar Pizarro Calquín y don Eduardo José Guerrero Schiappacasse. Con lo que la causa quedó en estudio conforme lo dispone el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales y, posteriormente, en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I) En cuanto al Recurso de Casación en la Forma:

1º) Que se ha argüido por los recurrentes que se configuraría en la especie la causal de invalidación prevista el artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, *“en haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del*



tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley”.

En cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho que se invocan, los impugnantes argumentan que sobre lo atinente al vicio de ultra petita, es evidente, toda vez que los demandantes no habrían dicho nada sobre lo establecido en el numeral DUODECIMO, motivo por el cual el Tribunal de la instancia rechaza la demanda, de la forma expresa que se señala:

“Que, y a la luz de lo antes expuesto, la acción de nulidad necesariamente debió ser interpuesta por la parte demandante en contra de ambas partes contratantes, esto es, contra la parte vendedora y la parte compradora, cuestión que no ocurrió en la especie, desde que la demanda fue entablada sólo en contra de la parte compradora, esto es, SOCOBAR SpA., no pudiendo prosperar en consecuencia la demanda en la forma en ha sido interpuesta”.

Expone quien recurre que de lo anterior se deduce que los demandados solicitan el rechazo por un fundamento diferente al que tuvo presente la Jueza A Quo con una petición muy restrictiva, ya que no deja opción al tribunal para que conceda algo diferente, por lo que entiende que en tales circunstancias, al rechazar la demanda, la sentencia de primer grado ha alterado lo contestado por los demandados, incurriendo en el vicio que se denuncia.

Añade el impugnante que el vicio de ultra petita consiste en haberse extendido la sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, o sea, cuando apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. A su vez, la doctrina comparada ve en la denominada ultra petita -más allá de lo pedido-, un vicio que ataca un principio rector de la actividad procesal, cual es, el principio de la congruencia y ese ataque se produce, precisamente, con la "incongruencia".

Detallan los actores que la "incongruencia", de conformidad a lo que expone el tratadista español Manuel Serra Domínguez, (Derecho Procesal Civil, Editorial Ariel, Barcelona, 1969, pág. 395), en su acepción más simple y general, puede ser considerada como *“la falta de adecuación entre las pretensiones de las*



partes formuladas oportunamente y la parte dispositiva de la resolución judicial". Además, resulta oportuno expresar que en el derecho comparado se ha resuelto que la congruencia consiste en el deber de los órganos judiciales de decidir los litigios que a su consideración se hayan sometidos, dando respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones.

Finalmente, se refiere en el libelo invalidatorio que el perjuicio producido por este vicio que motiva el recurso ha consistido en que dicha resolución se ha dictado en abierta contradicción, a lo obrado en autos, incurriendo en el vicio que se denuncia. Este vicio ha influido decisivamente en lo dispositivo del fallo, ya que de no haber incurrido el tribunal en él, habría concluido que pudo lisa y llanamente acoger la demanda. Procede que se enmiende todo el procedimiento para que se ajuste a la ley y las partes hagan valer sus derechos.

2º) Que antes de entrar al fondo del asunto discutido, aparece conveniente recordar que el recurso de casación es un recurso de derecho estricto, lo cual se traduce en que solo puede ser interpuesto en los casos expresamente señalados en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 764 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, se ha declarado por la Excelentísima Corte Suprema que el recurso de casación, en general, es de derecho estricto porque requiere causales específicas, lo que se advierte si se tienen en cuenta las exigencias para su interposición que se contemplan en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en el presente caso, resulta indispensable atender a lo que prescribe el inciso segundo de la referida norma, en cuanto dispone:

"Si el recurso es en la forma, el escrito mencionará expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca".

3º) Luego, en relación a la causal invocada, el numeral 4º del artículo 768, lo que se reprocha por el recurrente, en lo específico, a la Jueza de la causa, es haberse extendido a puntos no sometidos a su decisión, ello, en función de haber



rechazado su demanda por argumentos diversos a los que se hicieron valer por el demandado.

En ese sentido, desde una primera aproximación, se entiende por esta Sala que el recurrente ha errado en su interpretación de la norma en estudio, por cuanto lo que el Tribunal de primera instancia hizo en la práctica fue pronunciarse derechamente respecto de las condiciones y requisitos legales indispensables para poder acoger la acción de nulidad que fue deducida por la demandante, sin resolver de modo alguno respecto de otros puntos que no hubieran sido sometidos a su conocimiento, lo cual consta expresa y categóricamente de la propia argumentación en que se fundamenta esta causal.

De lo anterior, aparece tal y como se explica seguidamente, el accionar errado del recurrente, al estimar que el vicio no está dado por la relación de lo resuelto con la pretensión concedida a alguna de las partes, que en el caso sub iudice aparece que se ha hecho de manera regular y ajustada a derecho, sino que por cuestionar la verificación de las condiciones mínimas mediante las cuales se podía acoger la pretensión contenida en la demanda sometida a conocimiento del Tribunal, lo que en caso alguno configura el vicio de ultra petita que se invocado, desde que la aplicación del derecho es justamente la obligación del Tribunal, aun a silencio de las partes, atento a los pilares básicos de nuestro ordenamiento jurídico, entre los cuales aparece diáfano el principio general de la inexcusabilidad consagrado en el inciso segundo del artículo 76 de la Constitución Política de la República y en el inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales.

4º) Sobre este punto específico, el ex Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, don Carlos Anabalón Sanderson, expresa que *“el defecto de ultra petita escapa por completo al deber que asiste a los tribunales de apreciar la procedencia de las acciones y excepciones sometidas a su conocimiento y dar las razones legales que hayan tenido presentes para declararlas o no aceptables, aunque estas apreciaciones o fundamentos no hayan sido expresamente alegados por las partes”* (Tratado Práctico de Derecho Procesal Civil, Editorial El Jurista, Reimpresión Año 2018, página 581).



Luego, en idénticos términos, los profesores Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Míquel han sostenido que *“se ha resuelto que no se falla ultra petita si se resuelve sobre los presupuestos de la acción, porque los tribunales tienen el deber de examinar los presupuestos de una acción y sólo acoger la misma si se verifican sus presupuestos, independiente y sin importar la actividad que haya adoptado el adversario. Si no existe legitimidad activa o no se configuran los presupuestos de la acción, el tribunal debería rechazar la misma, sin incurrir en ultra petita”* (Los Recursos Procesales, Editorial Jurídica de Chile, Segunda Edición, Año 2012, página 255).

A su vez, el Doctor en Derecho, don Diego Palomo Vélez, citando a los autores españoles Montero y Flors, asevera que *“como ha señalado la doctrina extranjera, si la norma jurídica alegada por los litigantes no vincula al tribunal, sí que le vincula, en cambio, la causa por la que esa norma es alegada por aquellas, de manera que si la petición se sustenta en una determinada causa, esto es, un determinado título jurídico, comprensivo de unos hechos y de un específico fundamento jurídico, sólo será posible conceder o denegar lo que se pida con relación a ese fundamento alegado, pero no por otra causa distinta de la invocada”* (Proceso Civil: Los Recursos y Otros Medios de Impugnación, Editorial Thomson Reuters, Primera Edición, Año 2016, página 223).

Para concluir esta parte, resulta pertinente traer a colación al jurista Iván Ampuero Hunter, quien expone que *“en esto radica principalmente el rol creativo del juez, de colaboración con el legislador, a quien a través de un trabajo hermenéutico le corresponde esculpir la regla legal, extendiendo o restringiendo, integrando o corrigiendo el dato normativo, a fin de extraer la regla jurídica a aplicarse en el caso concreto. Es por ello que en las etapas de formación de la sentencia le vienen reconocidos al juez amplios poderes discrecionales, y es a través del ejercicio de este poder como crea la decisión. La decisión judicial no pasa, entonces, por un canon preestablecido en una regla concreta que adjudique el caso o con la ayuda de algún elemento hermenéutico de conocimiento de las partes, sino por medio de la creación por parte del órgano judicial de la única*



regula iuris correcta” (Rol del Juez, Prueba y Proceso. Ediciones DER. Primera Edición. Septiembre del año 2020. Páginas 206 y 207).

5º) Por otro lado, la jurisprudencia también se ha manifestado concordante con la postura asentada en doctrina en diversas sentencias, a saber:

“No falla ultra petita el tribunal que funda su sentencia en disposiciones no invocadas por las partes ... el sentenciador sólo queda obligado por las peticiones que le formula el demandante en su demanda y el demandado en su contestación, mas no por los fundamentos de derecho en que se apoyan sus pretensiones y defensas” (Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 21.863, de fecha 23 de junio de 1988).

“Atendidos los términos en que se desarrollaron los planteamientos propios del período de discusión de la causa, cobra vigencia la máxima jurídica iura novit curia, el juez conoce el derecho, con arreglo a la cual corresponde al juez decidir, de acuerdo al ordenamiento jurídico, aun cuando las partes no hayan expresado las leyes en que fundan sus derechos o hayan invocado otras distintas de las que el tribunal considera aplicables en la especie, de acuerdo a las alegaciones de las partes, a los hechos expuestos y las pruebas tendientes a comprobarlos en el proceso” (Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 767-2009, de fecha 22 de julio de 2010).

“En cuanto al derecho aplicable el Juez se encuentra vinculado por el principio iura novit curia, en el sentido que es el Juez quien conoce y aplica el derecho, sin que ello afecte la causa de pedir, esto es, no se encuentra limitado u obligado por los razonamientos jurídicos expresados por las partes, aspecto que no obsta a la exigencia que el derecho aplicable debe enlazarse a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes sostienen en el pleito” (Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 6989-2008, de fecha 17 de diciembre de 2010).

“Que el adagio iura novit curia (los jueces conocen el derecho) reconocido desde antiguo por la doctrina (Manuel E. Ballesteros, La Ley de Organización de los Tribunales de Chile, tomo I, p. 131), es significativo de la idea según la cual los magistrados pueden y deben aplicar a la cuestión de hecho (quaestio facti) las



normas legales que la gobiernan (quaestio juris). Sobre el mismo se explica: Como se dice muy frecuentemente, el juez, en todo caso, al que se le supone por razón de su cargo, perfecto conocedor del derecho, suplirá ex officio la errónea o imperfecta interpretación del derecho (R.D.J., T.60, 2-a parte, secc. 2-a, p.49).

En esa línea es el juez quien está llamado a definir el derecho atinente a los hechos aportados, por las partes, aun cuando estas no hayan alegado las leyes en que fundan sus pretensiones o hayan invocado otras distintas de las que el tribunal considera aplicables en la especie, de acuerdo a las alegaciones formuladas por los litigantes, a los hechos expuestos y las pruebas tendientes a comprobarlos en la litis.

El sentido de este brocardo se endilga a otorgar conducencia al derecho de petición –constitucionalmente asegurado– hacia la necesaria respuesta del órgano jurisdiccional contenida en la resolución que se pronuncie sobre lo requerido, como asimismo, a la seguridad en que la decisión de laya jurídica que emita reposará en el derecho vigente, ceñidos a los planteamientos efectuados en la fase de discusión, a los hechos y pruebas de autos” Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 9434-2011, de fecha 11 de abril de 2012).

“Que adicionalmente se debe tener en cuenta, que si bien es cierto, ex ante podría estimarse que los hechos relatados en la demanda que conforman la causa de pedir del actor, ya que tienen una connotación jurídica relevante en el proceso, que constituyen el fundamento axial de esa petición, y que como tales constriñen la petición del interesado, se erigirían como un límite del principio iura novit curia, pero ello no acontece en la realidad, si examinados y contrastados los elementos normativos de la causa petendi, y por otro lado, la posibilidad de aplicar el Derecho por el juez, no presentan una distinción nítida en el contexto del régimen de atribución de culpa de que se trata. Por lo mismo es viable, en materia de congruencia procesal, que se puedan efectuar por el órgano jurisdiccional cambios a la calificación jurídica de los hechos, en caso de error o hesitación de la parte, respecto del sistema por el cual debe responder el obligado, siempre que no se haya alterado el debate ni se aprecie indefensión de los litigantes,



circunstancias que no han sido probadas ni justificadas en autos” (Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 6624-2013, de fecha 12 de marzo de 2014).

6º) Así las cosas, teniendo en consideración los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales latamente reseñados en los dos basamentos precedentes, este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión que en la presente causa no se ha incurrido en la causal de ultra petita invocada, y ello, además, sustentado en dos básicas razones.

El primer motivo dice relación con un aspecto sustancial de la alegación impetrada, pues teniendo en cuenta el tenor literal de la norma legal en que se sustenta la causal de nulidad invocada, necesariamente se requiere que el sentenciador se haya extendido a puntos no sometidos a su decisión, lo cual, no resulta efectivo en el caso de marras, ya que incluso el mismo libelo impugnatorio así lo reconoce. Siendo una situación absolutamente diversa el hecho de que la jueza de la causa haya podido entrar a verificar el cumplimiento de los presupuesto procesales básicos de la acción incoada para determinar su procedencia.

Luego, en segundo término, esta Corte entiende que la sola circunstancia evidenciada en el párrafo anterior, tampoco hace que la sentencia impugnada incurra en el vicio invocado, pues como muy bien se explica en la doctrina y jurisprudencia ya citada, para estos efectos tiene plena aplicación el aforismo “iura novit curia” (el juez conoce el derecho), en virtud del cual la judicatura no se encuentra expresamente constreñido a las alegaciones que puedan impetrar las partes, sino que, por el contrario, en los aspectos que resultan netamente jurídicos, sin duda que los Tribunales pueden y deben actuar conforme a derecho, teniendo como límite no alterar la causa y el objeto de pedir de la pretensión, como asimismo, evitar cualquier tipo de indefensión que esta situación podría provocar a las partes, eventos que no suceden en la presente causa.

En consecuencia, no configurándose en la especie los elementos fácticos y jurídicos para la concurrencia de la causal de invalidación invocada, se debe concluir que el presente recurso de casación en la forma no puede prosperar.



7º) Finalmente, como un argumento de mayor abundamiento, se debe tener en cuenta que el recurso de casación constituye un medio de impugnación excepcional y de “*ultima ratio*”, ya que lleva a la invalidación de una resolución judicial, y por lo mismo, solo debe ser utilizado en el evento que no se cuente con otros medios para enmendar los vicios que se denuncian.

En el presente caso, el recurrente también ha deducido conjuntamente recurso de apelación, a través del cual fundamenta el agravio sufrido en los mismos antecedentes tenidos en consideración a raíz del recurso de casación en la forma impetrado, entre otros motivos, razón por la cual, de corroborarse la existencia del vicio denunciado, esta Corte se encuentra facultada para corregirlo o enmendarlo por vía de la apelación, lo cual viene a reforzar la idea de rechazar el presente recurso, como se hará en lo resolutivo.

II) En cuanto al recurso de apelación deducido:

Se reproduce la sentencia impugnada en alzada.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

8º) Que se debe partir de la base que el vocablo “disponer”, conforme a la Real Academia de la Lengua Española, en su quinta acepción, debe entenderse como “*ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o gravarlo, en vez de atenerse a la posesión o disfrute. Testar acerca de ello*”, se entiende que la interpretación utilizada por el Tribunal A Quo en el considerando sexto resulta conforme adecuada y conforme a derecho, no existiendo vicio alguno que enmendar por esta vía a este respecto.

9º) Luego, que en relación a los vicios denunciados en relación a la causal de casación precedentemente analizada, por economía procesal corresponde tener por reiterado en esta parte todo lo precedentemente analizado y concluidos en los motivos primero a séptimo que anteceden, debiendo descartarse toda esa argumentación de la recurrente a este respecto.

10º) Finalmente, y como corolario de todo lo ya expresado, se debe dejar expresa constancia que en atención a los graves y manifiestos vicios contenidos en la demanda impetrada por los recurrentes, los cuales resultan insalvables en esta instancia, hacen imposible que la acción impetrada pudiera ser acogida, ya



sea, por no haber sido enderezada en contra de todas las partes que debían formar parte de la litis, como asimismo, porque en su petitorio lo solicitado no resultaba correctamente encausado, todo lo cual, llevaba a que la demanda de nulidad e indemnización de perjuicios que nos convoca en ningún caso pudiera prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes, 764, 765, 766, 768 N° 4 y 769, del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I) Que **SE RECHAZA** el recurso de casación en la forma deducido por el señor abogado don Rodrigo Arzola Helo, en representación de los demandantes don José Alfredo Barón Solís y doña Margarita Paz Barón Solís, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Jueza Titular del Primer Juzgado de Letras de Vallenar, doña María Catalina López Werner.

II) Que **SE CONFIRMA** la ya individualizada sentencia apelada.

Regístrese y devuélvase.

Redactada por el Ministro Suplente don Rodrigo Cid Mora.

Regístrese y devuélvase

N°Civil-306-2021.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Copiapó integrada por Ministro Presidente Marcela Paz Ruth Araya N., Los Ministros (As) Juan Antonio Poblete M., Aida Osses H. y Ministro Suplente Rodrigo Miguel Cid M. Copiapo, tres de marzo de dos mil veintidós.

En Copiapo, a tres de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.